

MERCADOS SIN FRONTERAS Y DESARROLLO

David Ibarra
3 de septiembre de 2004

A la memoria de Víctor Urquidi y
Eduardo Césarman

Casi siempre México ha estado inserto en algún orden internacional no de su manufactura, sino impuesto desde afuera al que debe de acomodarse mediante reformas onerosas. El caso nuestro no es único, ni de hoy, afecta a toda la periferia mundial desde el colonialismo hasta la globalización del presente. Nuestras políticas nacionales han estado influidas por paradigmas económicos portadores de la visión del Primer Mundo y expresión de la necesidad inescapable de ordenar la economía mundial con normas que resguarden la convivencia disciplinada, pacífica, entre naciones. Por supuesto, los cambios en los criterios paradigmáticos cuidan de los intereses de los países dominantes e imponen cargas asimétricas al resto del mundo.

Las ideologías de respaldo a cualquier mudanza del orden internacional, abundan en subrayar sus ventajas y en singularizar como únicas sendas a la modernidad las que siguieron las potencias desarrolladas, sin parar mientes en las diferencias culturales, sociales o económicas que separan a los países periféricos del Primer Mundo. Ese es el dilema del Consenso de Washington y de sus reformas de primera y segunda generación.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el paradigma dominante --keynesiano-- responsabilizó al gobierno de cada país de cuidar del empleo y el desarrollo internos, incluso utilizando medidas restrictivas de las corrientes financieras y comerciales del mundo. Dentro de límites amplios, los países

tenían la opción abierta de establecer la política socioeconómica que mejor concordase con sus instituciones y culturas. Conforme a ese criterio, en América Latina se crearon oficinas de planeación, bancos de desarrollo, polos estatales de desarrollo, bancos centrales promotores de la inversión, presupuestos públicos vertidos a la infraestructura, políticas industriales proteccionistas. Entonces, el término cambio estructural se entendía como el esfuerzo de completar las redes interindustriales, pasar de producir artículos primarios a bienes intermedios y de capital. Los valores sociales fundamentales se asociaban al crecimiento, al empleo y a sostener los equilibrios políticos internos, absorbiendo mano de obra marginada y completando las redes de seguridad social. Había suficiente concordancia entre las ideas del Primer Mundo que giraban en torno a la ocupación plena y los propósitos de las naciones en desarrollo empeñados en cerrar la brecha del atraso.

Sin embargo, el mundo no se detuvo ahí. El ascenso del comercio, de las finanzas internacionales y de las empresas transnacionales, necesitaban de reglas que rebasasen el ámbito de lo nacional. El acrecentamiento de las capacidades productivas y la rentabilidad de las inversiones, demandaron de mercados sin fronteras con estabilidad de precios, de la integración libérrima de redes transnacionales de producción y comercio, del acotamiento de las soberanías nacionales. El intervencionismo estatal debió suprimirse y abolirse el proteccionismo. Como consecuencia, muchas de las instituciones creadas conforme al paradigma anterior debieron derruirse y la noción de cambio estructural se hizo sinónimo de privatización, desregulación y extranjerización.

El nuevo paradigma de la globalización implica la penetración a profundidad de los mercados en la conformación de las relaciones sociales de los

países. Los mercados son instituciones donde se intercambian bienes y servicios por los cuales se paga o se cobra. Según afirma Samuelson, si alguien posee un dólar, tiene un voto, pero si alguien tiene diez millones de dólares, comanda diez millones de votos en el mercado; sólo cuentan los poderes de compra, cuyas ponderaciones están en función del ingreso o la riqueza de los participantes. Más que en la selección de tecnologías, el mercado es eficiente si logra la asignación de recursos que equilibre demanda y oferta. El mercado no distingue entre ricos y pobres, nacionales o extranjeros ni abre oportunidades iguales a todos los ciudadanos; no es, por tanto, institución democrática, ni defiende valores colectivos independientes de la distribución preexistente del ingreso o de restricciones que le vienen de fuera impuestas normalmente por el Estado. Por eso, los monopolios y oligopolios suelen regularse --para impedir el abuso de ciudadanos y consumidores--, como también el tráfico de drogas o la propagación de la pobreza.

La competencia de los mercados crea poderosos incentivos a la mejora de la productividad y a la innovación, pero al limitar el número de ganadores, a la larga también crea tendencias a la formación de consorcios integrados vertical y horizontalmente que pronto transforman el poder económico en poder político. Ese proceso de concentración económica acaba limitando el impulso innovador de los mercados y, al globalizarse, tiende a reducir el ritmo del crecimiento mundial.

En efecto, los mercados sin fronteras y la internacionalización de las finanzas, tornan imposible o muy difícil, la instrumentación de políticas nacionales de empleo y crecimiento. Con economías abiertas, la posibilidad de que el Estado intervenga para sostener la demanda en su territorio, fácilmente es

contrarrestada por el éxodo masivo de capitales o importaciones igualmente masivas, causantes de desequilibrios insostenibles en la balanza de pagos, como pudo constatar, entre muchos otros, el primer gobierno socialista de Mitterand.

Si esa es la situación de cada uno de los países individualmente considerados --de los que no escapan más que los Estados Unidos--, la suma de sus efectos restrictivos limitará la expansión de la economía mundial. En México y América Latina ya se experimentan las tendencias aludidas al reducirse casi 60% la tasa secular de ascenso del producto real de compararse los períodos 1950-1980 y 1980-2001. Otro tanto ocurre con las doce principales economías de Europa Occidental, cuyo crecimiento medio anual se reduce del 4% al 2%. A escala mundial, el fenómeno es menos acusado por el repunte de China y la India, aún así, las tasas en dichos períodos caen casi 35%.

Hay un mercado mundial, pero no existe una sociedad de alcance mundial que pudiese suavizar los efectos deshumanizadores de aquél y validar un conjunto de valores sociales, acotadores del darwinismo mercantil, como ocurría a escala nacional antes del neoliberalismo sin fronteras. El impulso casi universal a la modernización política ha multiplicado el número de gobiernos electos democráticamente. Pero no hay elecciones que legitimen a un gobierno del mundo, hoy por hoy, inexistente. Sin embargo, tampoco hay vuelta atrás, el único margen de maniobra de la periferia reside en buscar fórmulas innovativas de adaptación a un mundo que se torna desfavorable y exigente.

Aparte de contagios y crisis que migran de país a país, ese estado de cosas, no sólo debilita las fuerzas impulsoras del desarrollo, al propio tiempo, los hombres y países débiles resultan intensamente marginalizados. Las naciones

del Primer Mundo tienen ventajas innegables por el tamaño de sus mercados, el dominio de las tecnologías y de las finanzas. Por eso, el 75% u 80% de la inversión extranjera, fertiliza endogámicamente a esos países que amparan apenas al 15% de la población mundial, incluyendo a los cuatro tigres asiáticos.

Entre 1950 y 1980, Europa Occidental, los Estados Unidos y otras economías avanzadas acrecentaron su ingreso per cápita al ritmo de 2-3% por año. África casi permaneció estancada, como también los territorios de la antigua URSS. América Latina creció a razón del 1.7% anual, menos que el promedio planetario ampliando su brecha con el Primer Mundo. Sólo Asia con el impulso de China, la India, Japón y otros países logró alcanzar el ritmo esperanzador del 3.4%, merced a que adaptó, torció, mejoró, escapó de múltiples maneras a la rígida ortodoxia de los paradigmas económicos dominantes.

En nuestro país, el fenómeno de la marginación se propaga a escala de las entidades federativas rezagadas y alejadas de la frontera norte. Entre 1993 y 2001, el producto nacional subió 2.5% por año, pero el de los estados pobres --con una población mayor al 27% del total-- perdió sistemáticamente terreno con tasas inferiores hasta 40% de esa cifra. En contraste, los estados ricos --con menos del 20% de la población-- situados en las cercanías de los Estados Unidos registraron crecimientos anuales de su ingreso del 3.5% al 5.5%. Un caso especial lo representan las entidades federativas del centro de la República, en donde los atractivos del tamaño de mercado están siendo contrarrestados por las fuerzas centrífugas del modelo de crecimiento exportador que lleva a las mejores inversiones fuera de los antiguos centros de consumo. Por esa razón el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco (con el 29% de la población) registran

ritmos de desarrollo semejantes o inferiores a la media nacional. En los hechos, menos de un quinto de la población ve mejorar sus niveles medios de bienestar.

La pobreza sigue afectando a más del 50% de los mexicanos. Y si en los dos últimos años se ha registrado una ligera mejoría, ello no es atribuible a las políticas públicas. Las remesas de los braceros alivian a varias zonas marginadas; los grandes empresarios afectados por los altos índices de rotación laboral han decidido pagar algo por encima de la inflación; dada la integración binacional, el ascenso del ciclo económico de los Estados Unidos está generando cierta recuperación del mercado laboral mexicano.

Sin inversión no hay desarrollo posible. Nuestro coeficiente de inversión, pese al influjo de inversión extranjera, dentro de oscilaciones se ha venido debilitando peligrosamente. En 1980, la formación bruta interna de capital representaba el 27.2% del producto, en 2003 sólo alcanzó el 19.8%. La política de apertura indiscriminada junto a errores y ausencia de políticas industriales, no podrían reclamar inocencia en ese proceso destructivo de la planta productiva del país y de los incentivos a la inversión vernácula. Como afirma Arturo González Cosío, nuestro mercado se está quedando sin productores ni consumidores con poder de compra.

La moraleja es simple. En nuestro país habría que gastar el poco capital político de gobierno, legislaturas y partidos en estrategias dirigidas a elevar el crecimiento de la economía nacional, en vez de dilapidarlo en reformas socialmente resistidas con poco o nulo impacto en la creación sostenida de empleos. Quizás ahí está la clave que pondría de acuerdo al país.